

San Miguel, veintisiete de febrero de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Comparece Judith Amelia Urzúa Arriaza, cédula de identidad N° 17.283.409-4, abogada habilitada para el ejercicio profesional, en representación de Freddy ENRIQUE FERRER CHOURIO, RUN N° 27.162.221-K, venezolano, domiciliado para los efectos del presente recurso en Av. Pedro de Valdivia 273, oficina 1306, comuna Providencia y ciudad de Santiago, RM, deduciendo recurso de Protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A (AFP UNO), RUT N° 76.960.424-3, en la persona de su representante legal don Teo Colombo Santórsola, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos de su representado garantizados en el Artículo 19 en sus números 2 y 24 de la Constitución Política de la República, es decir, Igualdad ante la Ley y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, de manera de restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado.

Funda su acción en que su representado en reiteradas ocasiones elevó solicitudes para la devolución de sus fondos previsionales de conformidad con lo establecido en la Ley 18.156, mediante la cual se regula la exención de cotizaciones previsionales, bajo las condiciones que indica, a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten.

En ese orden, la primera solicitud fue rechazada mediante correo electrónico de fecha de 26 de agosto de 2024, donde se informa que el motivo del rechazo se basó en la situación actual de la embajada de Venezuela, ya que al estar cerrada no permitía la emisión de los documentos ni tampoco la legalización de estos, agregando que si ya contaba con dicha documentación tampoco podían proceder ya que no podían verificar ni validar dicha documentación.

Expone que dicho rechazo resulta totalmente arbitrario e ilegal, por devenir de un mero capricho por parte de la recurrida, ya que el hecho del cierre de la Embajada con funciones Consulares de la República de Bolivariana de Venezuela no invalida los documentos emitidos legalmente por aquella autoridad, de tal manera, que no resulta efectivo el rechazo de la solicitud dado aquel cierre, ya



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKGRXTGBJXX

que como puede observarse la declaración jurada que acredita la afiliación del extranjero al sistema previsional venezolano, fue presentada con fecha 11 de julio de 2024 legalizada el 31 de julio del mismo año por la autoridad consular, es decir, antes del retiro del personal consular en virtud de la suspensión unilateral de la relaciones diplomáticas por parte del Gobierno de Venezuela, de tal manera que resulta írrito que la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida intente prejuzgar sobre la validez de este documento.

Refiere que con fecha 7 de septiembre de 2024, el afectado ingresó una nueva solicitud, la cual fue signada con el N° 100369, la que también fue objeto de rechazo, donde se insiste en desconocer la validez de los documentos incorporados por el afectado.

Manifiesta que dado los obstáculos que presentó la recurrida al afectado para hacer efectivo la devolución de los fondos previsionales, el extranjero concurrió a las oficinas y de la AFP UNO ubicada en San Martín, comuna de Santiago Centro con fecha 10 de septiembre de 2024, donde fue instruido por una ejecutiva para realizar la solicitud de manera presencial ya que según los argumentos que tuvo la funcionaria es que el portal web estaba presentando fallas, tal es así que le requirió los antecedentes de ambas solicitudes previamente presentadas para elevarlas a quien correspondía ver estos asuntos. En ese sentido, allí se llenó y firmó un formulario, el cual fue asignado con el folio N° 9530, al cual acompañó la siguiente documentación: 1.- Copia de cédula de identidad; 2.- copia del contrato de trabajo firmado entre el afectado y la empresa ADRIANZA FERRER HERNÁNDEZ SPA, RUT: 77.412.457-8, con fecha 20 de septiembre de 2021, a través de firma por clave única por intermedio del portal web de la Dirección del Trabajo; 3.- Copia de manifestación de voluntad donde el extranjero expresa su intención de permanecer y cotizar en el sistema previsional venezolano, con fecha 5 de agosto de 2024, debidamente legalizada por ante el Notario Interino de la 25° Notaria de Santiago Zaida Angélica Sepúlveda Rivera; 4.- Declaración jurada, Constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los seguros sociales, presentada con fecha 11 de julio de 2024 y legalizada con fecha 31 de julio de 2024 por ante la Embajada de la República Bolivariana de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKGRXTGBJXX

Venezuela con sede en la ciudad de Santiago; 5.- Finalmente, su título académico que lo acredita como abogado egresado de la Universidad del Zulia en la República Bolivariana de Venezuela, el cual se encuentra debidamente apostillado.

Concluye que conforme a la referida documentación el extranjero cumple con todos y cada uno de los requisitos regulados por la Superintendencia de Pensiones a través de su compendio y de la propia administradora de pensiones recurrida.

Señala que con fecha 25 de septiembre de 2024, la AFP UNO dicta un nuevo rechazo de la solicitud antes referida, por las siguientes consideraciones: Motivo del Rechazo es: Otros. En contrato no es posible validar la identidad del representante legal. Representante legal aparece con el mismo rut que el afiliado.

Describe que este nuevo rechazo representa una nueva arbitrariedad que decide cometer la autoridad de pensiones en contra del afectado ya que incluso se basa en un hecho falso, como lo es que no es posible validar al representante legal en el contrato de trabajo ya que tanto en la manifestación de voluntad como en aquél se identifica plenamente a las personas que fungieron como representantes legales, asimismo, que no es el mismo RUT del afiliado, tal como puede observarse del tenor de ambos documentos.

Arguye que dado los anteriores antecedentes fácticos es evidente la vulneración de los derechos de igualdad ante la Ley y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporeales, ya que en primer lugar, se hace nugatorio al extranjero profesional el derecho de solicitar y acceder a la devolución de sus fondos en aplicación de la Ley 18.156, y a su vez, se retienen ilegalmente los fondos previsionales del afectado conculcando el derecho de propiedad que se ejerce sobre dichos montos depositados y administrados por la recurrida. En conclusión, la anterior decisión adoptada por la recurrida implica una violación de derechos y/o garantías constitucional de carácter pluriofensivo, ya que en primer lugar, se le otorga un trato desigual ante la Ley al afectado, habida cuenta que se desconoce la aplicación de la Ley 18156, otorgándole un trato diferenciado frente a otros



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKGRXTGBJXX

extranjeros, e incluso a solicitudes análogas del propio afectado, donde sí se le permitió acceder al retiro de los fondos previsionales; En segundo lugar, esta conducta implica una violación al derecho constitución de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporeales, ya que se le priva de ejercer el mentado derecho real así como de disponer de fondos que pertenecen a su patrimonio y, en consecuencia, que corresponden a su propio peculio, producto de las actividades remunerativas ejercidas en el país.

Expresa que el presente recurso se encuentra sustentado, a su vez, en la reiteradas sentencias dictadas por esta Ilustrísima Corte, donde no sólo conforme al marco legal nacional se reconoce la propiedad sobre estos fondos, sino que a su vez, se han declarado admisible y tutelados mediante la presente acción cautelar por la indefensión que este tipo de decisiones adoptadas por la recurrida provoca en el técnico extranjero y afiliado, tal como se desprende de la sentencia dictada por este Órgano Jurisdiccional en el Rol Protección N° 45645- 2012, de fecha 24 de junio de 2013.

Previas citas legales refiere que se está en presencia de una persona que reúne todas y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley, estos son: 1.- Persona trabajadora en calidad de dependiente y extranjero; 2.- Profesional con el grado académico de Abogado en su país de origen; 3.- Con manifestación de voluntad en forma de anexo de contrato suscrito por el trabajador y el empleador, de cotizar en la institución previsional en el extranjero; 4.- Afiliada a una institución previsional que cubre las contingencias relativas a la enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

De tal manera, resulta a todas luces procedente en derecho la solicitud de devolución de fondos previsionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 18156, la cual expresamente autoriza en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley, y no existiendo justificación legal que avalen el rechazo de dicha solicitud, no puede más que concluirse que el mismo deriva de una actitud



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKGRXTGBJXX

caprichosa, arbitraria en consecuencia ilegal por parte de la Administradora de Fondos Previsionales recurrida, conducta que no puede ser sino reconducida a la legalidad, instruyendo lo que corresponda en derecho, lo que en el presente caso redunda en ordenar la devolución de los fondos correspondientes al solicitante afectado.

Solicita tener por interpuesto el presente Recurso de Protección, otorgarle tramitación, declararlo admisible y ordenar informar a la Administradora de Fondos de Pensiones AFP UNO SA, sobre los hechos antes descritos y los actos ilegales y arbitrarios, especialmente el Comprobante de rechazo de devolución técnico extranjero dictada por la recurrida con fecha 25 de septiembre de 2024 por medio del cual se ha rechazado de manera ilegal y arbitraria la solicitud de devolución de los fondos previsionales de don Freddy Ferrer Chourio, afectando de esta manera, sus garantías constitucionales, relativas a la Igualdad ante la Ley; derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporeales, de manera de restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección como afectado; y, en consecuencia, se le ordene conceder el remedio solicitado, esto es, dejar sin efecto el acto dictado por la recurrida con fecha 25 de septiembre de 2024 que rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el ciudadano afectado, y en consecuencia, se instruya y ordene a la recurrida la devolución de los fondos previsionales en los términos solicitados, todo dentro del plazo 5 días hábiles o en el que prudencialmente establezca esta Corte, todo con expresa condenación en costas.

Informando Romina Dalbosco Cornejo, abogada, en representación convencional de Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., refiere que la parte recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho que le impida, restrinja, moleste o amague su ejercicio. Por el contrario, se pretende ejercer por esta vía un derecho cuyo ejercicio y características está claramente definido en el ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que se pretende. Tal como lo ha dicho la Excelentísima Corte Suprema, para interponer legítimamente la acción de protección es necesario que quien la ejerza acredite ser titular de un derecho



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKGRXTGBJXX

indubitado. En este caso, la solicitud de la parte recurrente, esto es, la devolución de fondos previsionales solo procede para técnicos extranjeros de manera excepcional, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Circular N°553 de la Ley N°18.156, modificada por la Ley N°18.726, lo que no ocurre en el caso de la recurrente ya que su representada jamás ha negado la titularidad de los fondos previsionales del Sr. Ferrer.

Explica que este recurso de protección fue deducido por don Freddy Enrique Ferrer Chourio, cédula nacional de identidad 27.162.221-K, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., en adelante, UNO afp, solicitando el retiro total de sus ahorros previsionales. El recurrente señala que contaría con un título, un contrato de trabajo junto con un anexo que cuenta con la cláusula de voluntad de mantener su afiliación en su sistema de seguridad social de su país de origen y un certificado que acreditaría su afiliación. El señor Ferrer, presentó en dos oportunidades solicitudes por el trámite de técnico extranjero ante la Administradora, las cuales fueron rechazadas. El primer motivo de rechazo correspondió a una observación realizada al certificado de afiliación presentado y el segundo a una observación realizada respecto del contrato de trabajo. En consecuencia, la parte recurrente alega que se estaría infringiendo principalmente los derechos consagrados en los artículos 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile.

El Recurso de Protección interpuesto por don Freddy Enrique Ferrer Chourio, de nacionalidad venezolana, y con cédula identidad para extranjeros número 27.162.221-K, efectivamente se encuentra afiliado en UNO afp. desde octubre de 2019. En agosto de 2024, la parte recurrente presentó ante AFP UNO S.A. la documentación para iniciar su trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, en conformidad a la ley N°18.156, respecto del empleador “Adrianza Ferrer Hernández Spa”. En aquella oportunidad, la parte recurrente, acompañó los siguientes documentos: 1- Cédula de identidad chilena y venezolana. 2- Título Académico apostillado y reconocido en Chile. 3- Certificado Afiliación Previsional. 4- Contrato y anexo de trabajo. El 23 de agosto de 2024, UNO afp rechazó la solicitud, señalando que no fue posible validar la veracidad de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKGRXTGBJXX

la documentación presentada. En septiembre de 2024, el afiliado suscribió una solicitud bajo el folio 9530 para tramitar la devolución de sus fondos previsionales. Con fecha 25 de septiembre de 2024, se envió notificó el rechazo de la solicitud. En dicha oportunidad, al revisar los antecedentes aportados por la parte recurrente, UNO afp dio cuenta que no cumplía con los requisitos establecidos en el Compendio de Normas, la Ley N°18.156 y a la doctrina emanada por la Dirección del Trabajo, dado que al revisar en el sistema la información del empleador, repararon que el afiliado aparecía como representante legal de la empresa, contraviniendo así lo que se hacía mención en el contrato de trabajo presentado por el afiliado.

Añade que se revisó la plataforma <https://www.registrodeempresasysociedades.cl/> y los estatutos de la persona jurídica Adrianza Ferrer Hernández SpA. En dicha documentación, en el TITULO QUINTO.- OTROS PACTOS. ARTÍCULOS TRANSITORIOS: ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO se indica que “Las acciones en las que se encuentra dividido el capital se suscriben, enteran y pagan por los accionistas constituyentes de la siguiente manera: A) FREDDY ENRIQUE FERRER CHOURIO suscribe: 50 acciones ordinarias de la Serie única, equivalentes a la suma de \$1.000.000 de pesos del capital social, que paga \$333.333 pesos en dinero efectivo y al contado, los que en este acto ingresan a la caja social; \$666.667 pesos en dinero efectivo, en el plazo de 24 mes(es) y en la siguiente forma: cuotas mensuales. B) EUDO DAVID HERNANDEZ CAMBAR suscribe: 50 acciones ordinarias de la Serie única, equivalentes a la suma de \$1.000.000 de pesos del capital social, que paga \$333.333 pesos en dinero efectivo y al contado, los que en este acto ingresan a la caja social; \$666.667 pesos en dinero efectivo, en el plazo de 24 mes(es) y en la siguiente forma: cuotas mensuales. C) ADRIAN JESUS ADRIANZA PINEDA suscribe: 50 acciones ordinarias de la Serie única, equivalentes a la suma de \$1.000.000 de pesos del capital social, que paga \$333.333 pesos en dinero efectivo y al contado, los que en este acto ingresan a la caja social; \$666.667 pesos en dinero efectivo, en el plazo de 24 mes(es) y en la siguiente forma: cuotas mensuales.” En el párrafo anterior, se da cuenta que las tres personas



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKGRXTGBJXX

previamente individualizadas suscriben el mismo número de acciones, lo que, para la normativa vigente de la Dirección del Trabajo significa que todos los accionistas deben considerarse como accionistas mayoritarios, significando así que el recurrente no tendría una relación de subordinación y dependencia, elementos esenciales en la relación laboral.

Por lo expuesto precedentemente el recurrente no cumpliría con los requisitos esenciales para acceder de la manera excepcional a la devolución de sus fondos previsionales, dado que el afiliado no sería trabajador de la empresa Adrianza Ferrer Hernández SpA.

Expresa que en materia laboral y previsional, rige en Chile, por regla general, el principio de territorialidad, esto es, que a los trabajadores que se desempeñen en nuestro país, sean chilenos o extranjeros, se les aplican las leyes laborales y previsionales vigentes en Chile, salvo dos situaciones de excepción que contempla nuestra legislación: - En primer lugar, que el trabajador se encuentre acogido a un Convenio Bilateral de Seguridad Social en calidad de desplazado lo que le habilita para mantener el entero de cotizaciones en su país de origen y quedar exento de tal pago en el país al cual se le ha destinado a prestar servicios. - En Segundo lugar, que el trabajador quede exento de cotizar, o bien en caso de haber enterado cotizaciones, puedan efectuar el retiro de los fondos previsionales acumulados, siempre que dé cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley N° 18.156, sobre exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros. El artículo 1° de la referida ley y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos prescritos en el artículo 1° de dicha Ley y en el Libro II Título XI, del referido Compendio de Normas. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado cuerpo legal.

Reitera que en la especie no se ha comprobado la existencia de un acto que constituya una vulneración de los derechos alegados por el recurrente, quien



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKGRXTGBJXX

a la fecha no ha demostrado la existencia de un agravio concreto que derive en una privación, perturbación o amenaza a sus derechos garantizados por la Constitución. Por lo tanto, dado que no se ha evidenciado ninguna conducta que infrinja las garantías constitucionales del recurrente y que no se ha demostrado un acto que contravenga la legislación aplicable, no se puede establecer que haya existido un acto u omisión ilegal o arbitraria que haya causado el agravio alegado. En consecuencia, la ausencia de evidencia que respalde la alegación de vulneración de derechos sugiere que el recurso de protección no cumple con los requisitos necesarios para su admisibilidad y, por ende, no se justifica la intervención judicial solicitada. Es más, lo que sí resultaría arbitrario es acceder a lo solicitado por la parte recurrente, pues implicaría apartarse del principio de igualdad ante la ley y otorgar un trato diferenciado e injustificado sin respaldo legal suficiente. Este proceder vulneraría la igualdad de trato que corresponde a todos los afiliados en circunstancias similares. Al actuar de acorde a lo solicitado por la recurrente, esta Administradora vulneraría no sólo el marco normativo que la regula, sino también la confianza legítima que los afiliados depositan en la aplicación uniforme y razonable de las disposiciones legales.

En síntesis, a su juicio ha quedado demostrado a lo largo de esta presentación que no ha incurrido de forma arbitraria en la negación o rechazo a la solicitud formulada por el señor Freddy Ferrer por cuanto no cumplió con los requisitos establecidos en la ley ni la norma vigente de la Superintendencia de Pensiones y de la Dirección del Trabajo, por lo que la presente acción de protección no cumple ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita su total rechazo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º) Que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, cuyo objetivo es la adopción de medidas de carácter urgente, tendientes a salvaguardar los derechos o garantías constitucionales preexistentes, conculcados por actos u omisiones ilegales o arbitrarios.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKGRXTGBJXX

En efecto, la Excelentísima Corte Suprema ha señalado, que si bien en virtud de la competencia conservativa que el indicado arbitrio confiere, pueden adoptarse todas las medidas que se estimen conducentes para otorgar la debida protección a quienes han visto amagados sus derechos constitucionales previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo cierto es que no se puede perder de vista que esta acción constituye una medida de emergencia consagrada para dar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufra el ciudadano en sus derechos constitucionales producto de una acción u omisión que a todas luces sea ilegal y/o arbitraria, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho amagado, mientras se acude a la sede ordinaria o especial correspondiente, otorgando una tutela efectiva a los recurrentes.

2º) Que son presupuestos de la acción cautelar: a) Que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible al recurrido; b) Que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; c) Que dicho derecho esté señalado en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y d) Que exista posibilidad de que el órgano jurisdiccional ante el cual se plantea pueda adoptar las medidas de protección o cautela adecuadas para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

3º) Que en atención a las alegaciones formuladas por las partes corresponde determinar si el acto dictado por la recurrida con fecha 25 de septiembre de 2024 que rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales priva o perturba en forma ilegal y arbitraria los derechos del recurrente garantizados en el Artículo 19 en sus números 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

4) Que para dilucidar lo anterior cabe señalar que la Constitución Política de la República establece lo siguiente: “Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: ...2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias...” agregando en el numeral 24: “...El derecho de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKGRXTGBJXX

propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales...”.

5°) Que por su parte el artículo primero de Ley 18156 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

A su turno, el artículo 7 del mismo cuerpo legal prescribe: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKGRXTGBJXX

que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.

6°) Que conforme a las alegaciones efectuadas por las partes no se encuentra discutido en la presente causa que AFP UNO S.A. reconoce la titularidad de los fondos previsionales del Sr. Ferrer; que este último solicitó la devolución de dichos fondos como técnico extranjero en conformidad a la Ley N°18.156, respecto del empleador “Adrianza Ferrer Hernández Spa”, acompañando para ello los siguientes documentos: 1.- Cédula de identidad chilena y venezolana. 2- Título Académico apostillado y reconocido en Chile. 3- Certificado Afiliación Previsional. 4- Contrato y anexo de trabajo y que con fecha 25 de septiembre de 2024, se rechazó la solicitud en atención a que la A.F.P consideró que la parte recurrente no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, toda vez que repararon que el afiliado aparecía como representante legal de la empresa, contraviniendo así lo que se hacía mención en el contrato de trabajo presentado por él.

7°) Que, así las cosas, es posible dar por establecido que el recurrente al momento de requerir la devolución de sus fondos previsionales acompañó toda la documentación que la ley exige para ello y que el rechazo se debió únicamente a la observación efectuada por la recurrida al contrato de trabajo presentado, dado que a su juicio el afiliado no cumplía con los requisitos de procedencia de lo pedido, en razón de que no sería trabajador de la empresa Adrianza Ferrer Hernández SpA y no tendría una relación de subordinación y dependencia, elementos esenciales en la relación laboral.

8°) Que de la sola lectura de los artículos 1 y 7 de la Ley 18.156 se observa que dicha normativa en caso alguno ha facultado a las Administradoras de Fondos de Pensiones para declarar, determinar o establecer si un afiliado es o no trabajador de una empresa, si existe o no una relación de subordinación y dependencia y menos para pronunciarse sobre los elementos de validez de una relación laboral, excediendo con creces su mandato legal, arrogándose potestades que han sido encomendadas por ley a un órgano jurisdiccional y no a una entidad privada como lo es la recurrida, quien efectuó una calificación jurídica fuera del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKGRXTGBJXX

ámbito de su competencia, lo que deviene en el actuar ilegal de esta última y que evidentemente afecta los derechos de propiedad e igualdad ante la ley del reclamante, ya que lo priva de disponer de fondos que pertenecen a su patrimonio, justificando ello en un actuar que no encuentra sustento legal.

9) Que en consecuencia habiendo el recurrente dado cumplimiento a los requisitos establecidos por los artículos 1 y 7 de la Ley 18.156 y no existiendo justificación legal que avalen el rechazo de la devolución de sus fondos previsionales, fuerza concluir que el arbitrio será acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; **SE ACOGE**, sin costas, la acción deducida en estos antecedentes por Judith Amelia Urzúa Arriaza, cédula de identidad N° 17.283.409-4, abogada en representación de Freddy ENRIQUE FERRER CHOURIO, RUN N° 27.162.221-K, venezolano, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A (AFP UNO), en cuanto se dispone que la referida A.F.P. deberá dejar sin efecto el acto dictado con fecha 25 de septiembre de 2024 que rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el ciudadano afectado, y en consecuencia, procederá a la devolución de sus fondos previsionales, en el más breve plazo, que no podrá ser superior a 30 días hábiles.

Acordada con el voto en contra de la ministro (s) Carmen Gloria Escanilla Pérez, quien estuvo por rechazar el recurso, en atención a que falta uno de los requisitos básicos para la procedencia de la acción deducida, esto es, la existencia de un derecho indubitado, pues el que se invoca no está definido ni determinado.

En efecto, tanto la recurrente, como el recurrido, han manifestado alegaciones que, en definitiva, controvierten los supuestos fácticos que sirven de fundamento del recurso impetrado, razón por la cual los derechos que se invocan por la recurrente no pueden servir de base para el ejercicio de la presente acción constitucional y, como consecuencia, no es posible adoptar alguna medida de protección que los garantice, debiendo recurrirse a otras acciones que el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKGRXTGBJXX

ordenamiento jurídico entrega a las partes, donde corresponde hacer los pronunciamientos declarativos de derechos.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la ministra (s) Beatriz Cabrera Celsi y el voto en contra de su autora.

N° Protección- 20.881-2024.

Pronunciada por la Décima Tercera Sala integrada con los ministros Patricio Martínez Benavides, Carmen Gloria Escanilla Pérez y Beatriz Cabrera Celsi. No firma la ministra (s) Escanilla, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por haber cesado sus funciones.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKGRXTGBJXX

Pronunciado por la Decimotercera (zoom) Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Patricio Esteban Martínez B. y Ministra Suplente Beatriz Alejandra Cabrera C. Santiago, veintisiete de febrero de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de febrero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LKGRXTGBJXX